CAPITULO III

- Violencia y Estado mexicano.

En muchas ocasiones, la historia de los estados es una recopilación de pasajes llenos de violencia, ya sea para liberarse del yugo colonizador, para quitarse de encima la dictadura, repeler la recolonización o bien, convulsiones internas de grupos de poder que quieren alcanzar el poder de alguna u otra forma, la mala distribución del poder, etc. Es decir, la violencia en los estados modernos se traduce como una respuesta de los grupos oprimidos en contra de aquéllos que los someten.

Las relaciones de gobernados y gobernantes han sido una serie de fallidos intentos de convivir y empatar la realidad de una clase política dominante y su deseo de nación, a la par de una realidad social desigual y un profundo deseo de conservar la costumbre; es decir un choque entre modernidad y tradición. Las fallas se encuentran en el interior de los gobernantes por una parte y de los gobernados por otra. Ellos, los gobernantes, representan o al menos así debería de ser, los intereses de sus gobernados; intereses que se desahogan en las urnas bajo el voto universal y secreto cargados del “anhelo” de cohesión y unidad nacional; aunque la realidad sea otra. Por otro lado, está la obligación jurídica de la sociedad, a la cual más bien le parece que las leyes son algo ajeno o molesto y son hechas a un lado fácilmente. A cambio se prefiere un intercambio bajo presión o influencia.

Así, los estados en su más simple forma jurídica, política y social dependen de la voluntad del pueblo y su deseo de nación a medias, y el pueblo

depende de una clase política siempre en constante cambio y fricción con sus gobernados, siempre y cuando el pueblo no se encuentre en situación de represión por parte del aparato estatal y éste funcione como herramienta represiva y de sometimiento en manos de grupos y clases dominantes o en el poder.

En este contexto de represión y sometimiento se han venido desenvolviendo las relaciones del estado y el pueblo, el estado contiene en sí el cheque en blanco que le da la posibilidad de utilizar la violencia institucionalizada en pro del “orden público”. El uso deliberado de las “fuerzas del orden” en contra de manifestaciones, plantones, marchas y huelgas no es más que la clara muestra de la sordera política que sufren nuestros nobilísimos políticos y de la virtual inexistencia del Estado.

La legitimidad de la política y de los políticos a los ojos de la sociedad se enumera en una lista de factores que en conjunto recrean el microcosmos de lo que se llama cultura política. Factores que van desde la edad, la religión, nivel de educación, género, lugar de residencia, etc. son los que dan a la política una serie de valores que le otorgan esa validez y legitimidad necesaria para ser aceptada o rechazada por esta o aquella sociedad.

En México la idea del Estado ésta ligada a factores que incluyen la relación y desarrollo de las instituciones políticas y su función, otra es la que se atribuye al peso de los valores y actitudes sociales y sus consecuencias en la conducta política, otra es la relación de la economía y los grupos sociales en las decisiones políticas internas, y una más que entrelaza la situación económica internacional y el comportamiento o influencia que esta tiene en la política doméstica o interna.

Es así que en México el análisis del Estado no es una novedad literaria, muchos investigadores de la historia y de las ciencias sociales han descrito el devenir histórico del Estado mexicano en sus diferentes estadios y su relación con cuestiones endógenas o exógenas, tanto políticas, económicas, sociales, demográficas, culturales, etc.

Siendo México un país lleno de contrastes y desigualdades, tiene que resistir al embate de las crisis internacionales más recurrentes día con día y que afectan directamente gracias a la llamada globalización. Pero esclarecer la relación entre violencia y el Estado mexicano no es simplemente una cuestión de describir conceptos, sino también es describir los diferentes actores y los momentos de coyuntura que los llevan al enfrentamiento.

3.1 REVISIÓN HISTÓRICA

Desde el momento de la Independencia hasta la Revolución de 1910 México viviría bajo una ola de violencia que parecía endémica, el legado colonial virreinal y religioso haría que el vacío político fuera tan grande que la gana por controlar la naciente nación fuera el objetivo de más de uno. *"La batalla por la supremacía política afectó los objetivos de los antagonistas e influyó en el proceso por el cual los mexicanos resolvieron las disputas políticas."* (Camp, 1997:45)

La violencia fue la herramienta más efectiva para la resolución de aquellas disputas políticas, poniendo al ejército en el escenario nacional, que finalmente sería uno de los actores más beneficiados con grandes sumas del presupuesto estatal desde entonces.

Ya a mediados del siglo XIX la sociedad mexicana se debatía entre dos corrientes ideológicas, los liberales:

"…Una mezcla de ideas propias y ajenas que en gran parte rechazaba la tradición y el autoritarismo españoles […] Entre sus elementos se contaban con premisas estadounidenses […] como las garantías de la libertad política y la soberanía de la voluntad general. Entre sus principios estaban una mayor participación de la ciudadanía en el gobierno, garantías a la libertad de expresión y un poder legislativo fuerte." (Camp, 1997:46)

Y los conservadores: *"…ensalzaban la administración reformista de los Borbones antes de la Independencia e insistían en un ejecutivo fuerte […] eran favorables a políticas que promovieran la industrialización, y apoyaban las manufacturas más que la clase de pequeños propietarios."* (Camp, 1997:46-47). Aunque los dos bandos manifestaban pleno acuerdo en que México necesitaba industrializarse, ninguno de los dos ponía atención a la población indígena, que seguirían siendo la mayoría en el país. Conservadores y liberales pertenecían a una clase criolla de corte clase-mediero y clase alta. Se puede decir que el único bando "interesado" en los indígenas fueron los liberales, pero sólo para imponerles el modelo occidental individual que no iba acorde con la realidad comunal.

Los liberales consideraban la actuación de la Iglesia como el rezago de la colonia y como heredera de la tradición monárquica, en contraparte los conservadores consideraban a la Iglesia como aliado y como una fuerza importante; de aquí que se relacione a las clases altas y conservadoras con la Iglesia y da cuenta de cómo la sociedad mexicana arrastra y se atiene a la tradición centralista del poder.

Para el año de 1869 los liberales derrotan a los conservadores, quienes pidieron la intervención extranjera por considerar las nuevas leyes supresoras de la Iglesia católica. Así, los franceses intervienen de 1862-1867 tratando de entronizar a Maximiliano, quien fue derrotado finalmente bajo el mando de Benito Juárez.

Durante el breve periodo que va de 1867 a 1876 los liberales gobernaron dándole a México una de sus primeras experiencias de gobierno liberal funcional. Pero a la muerte de Benito Juárez sus sucesores no pudieron mantener el control del gobierno terminando con la rebelión de Díaz, militar de antiguas batallas contra los franceses y la toma del poder. El gobierno de Díaz se prolongó con su dictadura hasta el año de 1911, no sin antes introducir a una nueva clase de liberales que en su mayoría eran ex militares y que coincidían con la idea de traer a México una nueva idea de progreso: el positivismo.

Dicha doctrina antepone la razón científica para la resolución de problemas y el diseño de políticas enfocados en forma científica. De carácter moderado, el positivismo mexicano buscaba el orden y el progreso, la paz y la libertad como garantes del crecimiento. Y la mejor manera de difundir los valores que el positivismo traía consigo fue la educación pública, creando así la Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México.

Con la ideología a su disposición y los medios para mantener un efectivo control de la población, Díaz perpetuó su poder que tuvo que negociar con la gente “influyente” de cada región del país, haciendo del arreglo político una herramienta eficiente de las clases políticas y que dejaría ver la fuerza e influencia que tenían los grupos sociales y económicos sobre el país. Los puestos de mayor relevancia en el país fueron regalos, prebendas y promesas hechas con aquellos individuos “influyentes”, que lo único que hacían era extender la mano de la dictadura y que recibían su “premio” en forma de una mayor influencia y control de sus regiones.

Con aquellos que se resistían al control de la dictadura, Díaz fue menos complaciente. En esa época la prensa, los indígenas y en general las capas sociales más bajas sufrieron la mano dura de Díaz, *"Contra sus enemigos más recalcitrantes Díaz estaba dispuesto a emplear técnicas menos amables. Hacia el fin de su régimen la censura de la prensa se generalizó: el presidente favorecía más bien una prensa controlada y elogiosa, para contrarrestar la crítica de fuentes independientes. Cuando las amenazas o el encarcelamiento no eran suficientes para disuadir a sus opositores, recurría a medidas más severas. Típicamente, las víctimas de la represión violenta eran los grupos más bajos. Un ejemplo notorio de esa política fue el tratamiento dispensado a los yaquis de Sonora, que se rebelaron cuando miembros influyentes del gobierno de Díaz empezaron a apoderarse de sus tierras."* (Camp, 1997:55).

Ostentando el poder basado en la tradición monárquica española pero sin responder a una autoridad superior, Díaz gobernaba sin freno. Sí bien Díaz logró situar al estado en la sociedad, aunque a la fuerza; no logró consolidar sus instituciones. Logró avances en el desarrollo de infraestructura, pero no pudo y no quería solventar las necesidades de las clases bajas, su simpatía con los extranjeros sobre todo europeos y sus constantes reelecciones hicieron que el creciente nacionalismo en el país jugara un papel determinante, culminando en la Revolución de 1910.

Con la Revolución, México entraría una vez más al terreno de la violencia, pero esta vez sería para transformar la idea de nación. Aunque muy pocos actores de la revolución fungieron como ideólogos tales como Madero, los hermanos Flores Magon, Carranza. El resto de los actores como Villa, Zapata, Orozco proponían ideas más radicales de transformación en contraste con las ideas liberales ortodoxas de Madero que proponían sólo un cambio moderado y no un cambio estructural de la sociedad. Ideales cómo el "sufragio efectivo, no reelección" le fueron dando al estado una mayor presencia en el

país pero no le dio la legitimidad suficiente entre la población; situación que perduraría en prácticamente todo el siglo XX. Sí bien se logró la no reelección de un individuo en el poder, sí se logró la reelección sexenal a través del partido de estado que gobernaría la mayor parte del siglo XX: el PRI.

El Estado siguió tendiendo un dominio precario en el país aún disponiendo de los recursos suficientes. Sólo en localidades específicas el imperio de la ley se estableció y en la mayor parte del territorio nacional se continuaba ejerciendo el arreglo político mediante intermediarios y personas "influyentes" de la región. *"Siempre resulta preferible para todos un mal arreglo a un buen pleito y la lógica de la extorsión, muy semejante a la del siglo XIX, sigue siendo común y rentable, de modo que la operación cotidiana del aparato estatal debe ser negociada con los intermediarios: sindicalistas, líderes campesinos, representantes de grupos empresariales, jerarcas del clero, medios de comunicación, etc."* (Waldman y Reinares, 1999:300). Es así que para entender la relación entre estado y población es necesario tener en cuenta que entre aquellos dos figura la sombra del llamado "partido de estado".

3.2 EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

El PRI, durante su larga vida en el poder; hizo de la vida política en México y del estado un entramado de redes clientelares, corporativistas, paternalistas y de corrupción a los más altos niveles. Y la mayoría que hablaba del gobierno se refería al PRI o como el PRI-gobierno. Su permanencia en el poder durante tantos años se explica por la institucionalización de la ideología revolucionaria. Dicha lucha se percibe cómo una lucha que recoge el sentimiento de confrontación del pueblo contra el estado y este ha sido el discurso que dio continuidad y validez a los gobiernos del PRI.

El discurso oficial relata y encarna el espíritu insurreccional del pueblo, es una “guerra justa” la del pueblo contra la tiranía de gobierno. Tanto la Independencia como la Revolución fueron movimientos que terminaron con la tiranía que sufría la sociedad mexicana de la época, el pueblo terminó con siglos de yugo español y tiranía peninsular, el movimiento popular de 1910 también terminaría con el autoritarismo de Díaz. El pueblo es el que encarna la lucha y el PRI le da validez, a lo cual resulta viable casi para cualquier persona, líder o representante enarbolar los derechos del pueblo y que su causa o demanda fuera auspiciada y patrocinada por miembros de la elite política priísta, por lo tanto es siempre difícil imponer el estado de derecho y que éste sea una cosa que pase a segundo plano.

La vocación justiciera y popular del PRI es la resulta de la *“herencia insurreccional”* (Waldman y Reinares, 1999:300) que afianza a través del discurso oficial apoyado en la premisa de la lucha popular.

La clase política posrevolucionaria sometía al estado, porque necesitaba de la legislación, el aparato, los recursos para poder maniobrar en su continua gestión. El estado mexicano fue sometido bajo la modalidad el secuestro por parte de la clase política dominante, que resultaban ser los priístas; porque sabían que un estado flexible, corrupto y blando sería un rehén que se podría controlar fácilmente. En contraparte de un estado inflexible, autónomo y exigente donde los grupos de poder político no tendrían mucho margen de operación y si se atendrían a un estado de derecho.

Así, se establece que la corrupción, las decisiones “bajo el agua”, los favores contra recibo de mayor poder o prebendas económicas no son resultado de un estado con poder desmedido sino de una clase política

preponderante y prepotente. De que siga en el poder o de que pueda ser desechada la clase política va en función de su capacidad de dar: dinero, empleos, exenciones, “palancas”, favores, etc. en completa complicidad de la sociedad que solapa el arreglo fácil.

En conjunto generan la desobediencia y el incumplimiento de la ley dándole al grupo en el poder la certeza de su supervivencia con sus grupos corporativizados y a la orden de intereses sexenales. Sindicatos tan grandes como el de los maestros, que de alguna manera representan esa clase media en franca extinción y decadencia, el de los campesinos, gremio que no acaba de ver su suerte, el de las organizaciones populares, que en resumidas cuentas no figura lo popular en sus ideales; le dieron durante mucho tiempo el vital voto al PRI para perpetuar la monarquía sexenal.

Fueron más de 70 años los que el PRI mantuvo el poder, durante los cuales la violencia instrumental estatal estaba a la orden del día. Capítulos como la masacre de Tlatelolco, la desaparición de simpatizantes del PRD durante la presidencia de Salinas, la matanza en Acteal, los constantes enfrentamientos pre y post electorales, la censura de medios y periodistas, la desaparición forzosa y callada de dirigentes sociales, el asesinato de líderes políticos que al parecer sabían y dijeron de más como el caso de Colosio, Clouthier, el cardenal Posadas, Ruiz Massieu; sin contar aquellos casos que no fueron del conocimiento de la victima y mucho menos de la sociedad y así la lista de páginas y páginas de violento reacomodo político y fricción de las cúpulas de poder.

El único propósito era mantener la “gobernabilidad” y que la violencia sea sólo una sorpresa dentro de una sociedad que goza de “tranquilidad y

estabilidad" social, para que así la atención se dirigiera hacía el hecho violento y no hacía el visible desmembramiento de la sociedad auspiciado por la elite política en turno.

Los constantes fraudes electorales como el de 1988 y el de 1994, la interminable privatización a ultranza que se implantó a marchas forzadas y que terminaría por desquiciar la economía nacional con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte como punta de lanza de las políticas macroeconómicas de Salinas y que habría de darle al país un nuevo giro en cuanto a su realidad de subdesarrollo y atraso mantuvieron al país al borde de una guerra civil generalizada. *"Se ha dicho con frecuencia que entre 1982 y 1994 se intentó en México una reforma para liberalizar la economía pero sin alterar el orden político […] Las reformas fueron semejantes a las emprendidas en casi todo el resto del mundo durante las décadas de los ochenta y noventa […] se procuró dar mayor flexibilidad a la producción, mejorar la competitividad, mantener en equilibrio las finanzas públicas, controlar severamente la masa monetaria, privatizar empresas paraestatales y modificar la estructura del gasto social […] Se intentó, en primer lugar, despolitizar algunos mercados cuya organización era un obstáculo para el funcionamiento normal de una economía compleja. Tal fue el propósito de la apertura comercial, de la privatización de de la Banca y otras numerosas empresas públicas, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la regulación del Banco de México…"* (Waldman y Reinares, 1999: 302,303).

Con las reformas al artículo 27 de la Constitución, la incursión de la violencia armada en varios estados del país dejaba al descubierto la manipulación por parte del PRI-gobierno y de la familia revolucionaria que continuaban favoreciendo a la elite política y económica del país a través de redes que incluían los nombres de muchos narcotraficantes y que en conjunto acabaron por remodelar la nueva política nacional e introduciendo el nuevo modelo político: la narcopolítica.

Es el sexenio de Salinas el que ha dado mucho de que hablar en el siglo pasado en cuanto a la violencia en México se refiere, de 1988 a 1994 se registraron 1252 actos de violencia relacionados con cuestiones electorales y de militancia partidista que dejaron 332 muertos (www.tlahui.com), en lo que se ha podido contabilizar. Los medios de comunicación y sobre todo los periodistas sufrieron la persecución y el acoso del régimen dejando un total de 32 periodistas asesinados junto a los 70 periodistas muertos en el sexenio de Zedillo sin contar los numerosos casos de tortura, acoso, atentados, secuestro, robo y accidentes sospechosos de los que fueron victimas los periodistas en esos sexenios (www.tlahui.com)

Así, el partido de estado empezaría a contar sus días en el poder, el problema radicaba en la falta de representatividad del partido a nivel local; es decir, el partido ya no podía dar cabida a todos los intereses creados alrededor de él mismo. La creciente complejidad social hacía muy difícil el arreglo político tradicional y por lo tanto dar cabida a todos en un solo programa de gobierno se volvió impracticable, hecho que aprovecharon los demás partidos y sus intermediarios en los medios locales acrecentando el disgusto de la población y dando como resultado la derrota del PRI en las “históricas” elecciones del 2 de julio donde el candidato de la derecha, Vicente Fox haría uso de lo que se llamaría después “voto de castigo” o “voto de hartazgo” y se perfilaba al triunfo electoral. Aunque todavía hoy los mexicanos nos preguntamos ¿fue la mejor decisión?

3.3 EL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

Todos aquellos actos de tensión política y social se hicieron bajo la complicidad del estado y sólo hacía falta la herramienta económica que le diera al gobierno la certeza de sometimiento sobre la población. Y la obtuvo cuando el presidente Salinas firmo el 1 de enero de 1994 el TLCAN, que lejos de incorporar a México en una orbita mucho más estratégica sólo colocó al país en "bandeja de plata" para los intereses norteamericanos y sus transnacionales, abandonando la protección de los derechos laborales, dejando al campo mexicano en franca desventaja ante los subsidios que los "farmers" estadounidenses gozan y a las pequeñas empresas sin herramientas para su desarrollo. Por lo tanto el terreno fértil para ejercer un control mucho más efectivo de la población y sobre todo de sus medios de subsistencia se hacia realidad para el gobierno y pesadilla para la población.

Una tensión que se dejó ver no sólo a nivel nacional sino también internacional fue el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que surgió el primero de enero de 1994 a la par de la firma del TLC, aunque sus inicios se hablan desde mucho antes; enarbolando la consigna del olvido sociopolítico que han sufrido las comunidades indígenas en nuestro país.

Con un fuerte sentimiento de rechazo al TLC y a las políticas neoliberales que se implementaban desde la capital, el EZLN se posicionó en la opinión pública protagonizando junto con el gobierno federal una nueva ola de violencia en la vida nacional.

Pronto, el EZLN encontraría el apoyo de muchos sectores de la población en México, tanto los intelectuales, movimientos de izquierda, organizaciones populares y campesinas y sobre todo los jóvenes auspiciarían la existencia del movimiento en cuanto que apuntaban y reclamaban una

realidad nacional deprimente y de todos conocida. Para muchos el EZ fue el nuevo paradigma de la lucha social y reivindicación de los derechos de los pueblos y las minorías oprimidas en el país, para otros el EZ significó un desequilibrio para sus intereses y me refiero a las empresas transnacionales y sus intereses en la región de Chiapas.

Para muchos indígenas el EZ significó una voz y un espacio diseñado para que fueran escuchadas sus demandas, una prueba más de la heterogeneidad nacional y de cómo muchos de los compromisos políticos que adquiere el gobierno nos son con los más necesitados. A la fecha se cuentan con 580 comunidades controladas por el EZ en 35 municipios del estado de Chiapas, dichas comunidades se encuentran en su mayoría en la zona norte o también conocida como la región de Los Altos donde se encuentra la mayor concentración de pobreza entre la población indígena y una de las que registra un mayor índice de analfabetismo, alta tasa de natalidad y de mortalidad.

Con lo anterior podemos asegurar que la región vive un abandono total de las funciones básicas y específicas del estado que es proveer salud, educación, vivienda entre otros servicios básicos que por ley el gobierno deberá de atender sin distinción de raza, credo religioso, filiación política, etc.

Sin razón aparente, el gobierno federal y estatal hace oídos sordos a las necesidades básicas de su población y más la indígena, esta última a su vez se encuentra entre los caciques y terratenientes como intermediarios de las decisiones que afectan la vida política y social del estado, entre el conflicto armado protagonizado por el ejército nacional y el EZ, viva imagen de la confrontación de pueblo contra la tiranía del aparato estatal, entre conflictos de carácter religioso de católicos y los diversos credos asentados en la región y

demás obstáculos a vencer por este sector de la población tan golpeado y marginado.

El rol vanguardista del EZLN que ha tomado dentro de los movimientos sociales en México se da en medio de una realidad nacional complicada y conflictiva. Mientras la clase política nacional sufre una de sus crisis de credibilidad más profunda de su historia, deslegitimada enormemente y para prueba las pasadas elecciones de julio del 2003 y una sociedad que no acaba de posicionarse en el escenario nacional bajo esquemas de representatividad más permanentes, consistentes, contundentes y sistemáticos que le den la posibilidad de ser la "sociedad civil" que juegue un papel importante en las decisiones nacionales. Además de vivir bajo este esquema nacional el EZ se enfrenta también a su inserción en los movimientos sociales de vanguardia en América Latina que forman ya una gran familia de luchas del pueblo, que han venido cobrando fuerza en casi toda la región latinoamericana.

Cómo ejemplos de movimientos vanguardistas en el siglo pasado se cuenta con la Unión Soviética en la década de los 20's, lugar que después ocuparía China hasta los 60's, así los movimientos se han venido desarrollando desde oriente hasta occidente y es tiempo para América Latina de asumir esa vanguardia. Y no es entonces extraño que diversos movimientos con carácter popular se hayan venido desenvolviendo a lo largo del siglo XX como el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, los Piqueteros en Argentina, los movimientos indígenas de Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, las FARC en Colombia, entre otros.

Pero falta el dialogo y organización de estos grupos entre si para adquirir presencia no sólo nacional sino regional y mundial, es un dialogo de carácter

urgente que posicionaría la reivindicación social, el respeto a los derechos humanos y laborales, la posible disminución de la pobreza en la región, el derecho a la educación, salud, vivienda, el respeto a la identidad entre otras demandas sociales, como premisas de verdadero desarrollo de cada uno de los países de la región.

Sin embargo Latinoamérica se enfrenta, al igual que el EZLN; ante el acoso de las crisis económicas, políticas, sociales de grandes dimensiones y que son auspiciadas por gobiernos de carácter unilateral de la mano con instituciones financieras internacionales, que dictan la mejor manera de organizar a un estado que muchas veces ni conocen. Nuestra América se debate en medio de gobiernos de derecha cada vez más belicosos e intolerantes como Menem en Argentina, Fox en nuestro país, Sánchez de Lozada en Bolivia o Uribe en Colombia.

3.4 LÓGICA DE LA VIOLENCIA ESTATAL EN MÉXICO

Son muchos los casos donde el estado actúa como represor de las masas y el caso de México no es exclusivo ni mucho menos novedoso: más de un cuarto de millón de kurdos y turcos han sido torturados, secuestrados y desaparecidos por la policía y el ejército desde 1980, decenas de indígenas en Perú y Guatemala, niños de la calle en Brasil y Guatemala fueron brutalmente asesinados por brigadas del gobierno, palestinos en Kuwait, kurdos en Irak, mujeres y niñas musulmanes en Bosnia han sido tratados de la misma manera. *"Some 6000 people in dozens of countries were legally shot, hung, electrocuted, gassed, or stoned to death by their respective status between 1985 y 1992 for political misdeeds: criticism of the state, membership in banned political parties or groups, or for adherence to the "wrong" religion; for moral deeds: adultery, prostitution, homosexuality, sodomy, or alcohol and drug*

use; for economic offenses: burglary, embezzling, and corruption; and for violent crimes: rape, assault, and murder." (Nagengast, 1994:120).

Aunque la aseveración de que han sido unas 6000 personas alrededor del mundo que han sido objeto de violencia por parte de sus gobiernos se antoja un poco ingenua y por momentos inverosímil. Es necesario tomar en cuanta aquella violencia que desatan otros estados por medio de injerencia política, económica y cultural que también se traduce como violencia.

La violencia estatal en México requiere de un estudio exhaustivo de su sociedad y de cómo esta se relaciona con el estado. Como ya he descrito, la violencia en México es un cúmulo de aristas que por si solas no explican el fenómeno de la violencia. Cuestiones que tocan desde lo biológico hasta lo económico, pasando por lo público y lo privado dan una cantidad enorme de datos que podrían explicar la violencia en México.

Con rasgos característicos, la violencia en nuestro país trastoca todo lo que envuelve al mexicano como individuo, por ejemplo la corrupción. Incluso se afirma que la violencia tiene toda una lógica que funciona sin detenerse a costa de la población. En México como en muchas partes del mundo, la violencia se genera por condiciones económicas y psicosociales adversas y a veces extremas.

Uno de las condiciones económicas es la mala distribución del ingreso en el país que es extraordinariamente desigual, con cerca de 40 millones de pobres o más por un lado y por otro lado sólo algunas familias que concentran mucha de la riqueza que se genera en el país y que figuran entre las más ricas de América. Entre esas familias se encuentra el empresario Carlos Slim Helú quien, según la revista Forbes ocupa el lugar 35 a nivel mundial. Otra condición que tiene que ver con la economía es la cuestión laboral que tiene a la mayor

parte de la población mexicana viviendo con menos de 1 o 2 dólares diarios, aunado a esto encontramos también que la tasa de natalidad es muy grande en zonas rurales lo que obliga a las personas a emigrar a los centros urbanos en busca de una “mejor calidad de vida”, nada más alejado de la realidad.

El resultado inmediato es el agotamiento de los recursos disponibles para satisfacer a toda la población y es entonces que la fricción por obtener lo necesario para sobrevivir se convierte en una lucha que bien se podría enmarcar en una lucha de clases como lo afirmaba Marx.

Otra arista de tipo económica es aquella que tiene que ver con la implementación de la política económica, es de todos conocido que en buena medida dicha política se dicta desde centros de poder ajenos a la realidad nacional cómo Washington. Los postulados económicos de privatización a ultranza y la disminución del gasto social son la punta de lanza de la clase política mexicana subordinada a intereses extranjeros. Si bien la interdependencia económica que mantiene México con respecto de los Estados Unidos ha desembocado en alguna derrama económica importante en alguna época específica, la misma historia nos dice que dicha relación ha sido muy poco beneficiosa para México y muy benéfica para unos cuantos que mantienen el control de los medios de producción.

La lógica del poder en México respondía anteriormente a una estructura monopartidista y secular que se fue endureciendo conforme el estado de derecho fuera nulo. Con el tiempo dicha estructura se fue convirtiendo en un gigante que era muy complicado mantener en pie. Con excesivos niveles de corrupción que el mismo estado toleraría, el PRI se fue convirtiendo en una dictadura disfrazada que no tenía que rendir cuentas a nadie, mucho menos a

la población. Pero mantenerlo lejos de las enfermedades que él mismo creara como la corrupción, la coerción, el arreglo fácil, exceso de compromisos e intereses creados hacia el interior, etc. fue directamente imposible.

La derrota del PRI dio luz verde para el reacomodo político y para que la forma tradicional de arreglo político se modificara tornando más difícil la intermediación entre los actores políticos y la gente influyente de cada región.

Para el nuevo gobierno no ha sido fácil desmantelar las redes clientelares, clara herencia del PRI y mucho menos reacomodar todos los intereses y compromisos creados con anterioridad. Es cierto que ya no existe el PRI como única entidad capaz de controlar el estado, pero la violencia ejercida desde arriba continua, *"El punto de vista oficial dominante tiende a minimizar los fenómenos de violencia generados por el propio poder. La idea de "orden" aparece como una máscara para ocultar la imperiosa necesidad que tienen los sectores hegemónicos y gobernantes de recurrir a la violencia para mantenerse como tales. Se llega al extremo de considerar que se vive en una situación de "estabilidad política" y un "estado de paz social" cuando la violencia es ejercida sólo desde arriba, a pesar de que se sucedan con mayor o menor intensidad los asesinatos, las torturas y la persecución policíaca"* (Pereyra, 1974:5).

En cuanto a lo que respecta al estado de Chiapas la movilización del ejército mexicano cómo táctica de intimidación y auspiciando grupos paramilitares no ha terminado y es continuo el hostigamiento a las comunidades que simpatizan con el EZLN. Su táctica es de desgaste, de presión psicológica y por supuesto de violación a los derechos humanos de las comunidades. Prueba de que la instigación continua se encuentra en el diario La Jornada en su edición del día jueves 12 de febrero del 2004 donde apunta: *"La presencia, articulación y disposición territorial de grandes unidades, agrupamientos, fuerza de intervención rápida y pequeñas unidades, en una zona de operaciones dentro del territorio indígena, confirma que en Chiapas no sólo se aplican operaciones irregulares, sino que la*

lógica de una guerra regular persiste, se fortalece, especializa y perfecciona" (La Jornada, 12/febrero/2004).

El doble papel que juega el ejército en la zona chiapaneca se nota por el apoyo que brindan a grupos paramilitares para amedrentar y cometer atropellos contra los indígenas zapatistas de la zona. Grupos paramilitares como “Paz y Justicia” en la zona norte que comprende las comunidades de Tila, Tumbalá, Chilón, Salto del Agua, Palenque y Sabanilla en el norte del estado, el grupo MIRA (Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista) liderado por el diputado local Pedro Chulin de extracción priísta y que opera en Oxchuc, Ocosingo y Huixtan en la zona de Los Altos, grupo los Chinchulines en Yajalón al norte de Chiapas, Máscara Roja en Chamula y San Andrés Larrainzar en Los Altos, el grupo Alianza San Bartolomé de los Llanos en Venustiano Carranza en la región de los Valles Centrales, el grupo identificado como OPDIC y que sus integrantes son priístas, entre otros que no han sido identificados pero que se tiene conocimiento de sus acciones.

Pero eso no ha sido todo, el ejército ha desplegado un impresionante operativo que comprende acciones conjuntas con el gobierno estatal, grupos paramilitares y terratenientes de la región que auspician la creación de “guardias blancas”, según ellos para cuidar lo que les pertenece. Dicho operativo también fue publicado por La Jornada y describe cómo en la zona de la selva Lacandona el ejército ha desplegado fuerzas especiales para amedrentar a los pobladores de la región. La distribución de dichos efectivos se hizo de la siguiente manera: *“En la selva Lacandona, prosigue el análisis, "si bien las operaciones militares también son irregulares, éstas son complementarias al despliegue de una operación militar regular, donde actúan las fuerzas organizadas conforme a planes definidos en campaña, empleando la maniobra y la batalla para decidir de la mejor manera posible la*

causa". Siempre citando los textos y manuales de campaña que emplea la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el CAPISE señala: "La zona de operaciones tendrá tantos comandantes como teatros de operaciones comprenda, quienes serán designados por el Presidente de la República". Cada área se divide en dos porciones: una zona del frente o de combate y una zona de retaguardia. La zona del frente deberá contener el espacio necesario para llevar a cabo las operaciones de combate y su apoyo logístico y administrativo inmediato. La zona de retaguardia contendrá "el espacio para la administración del teatro como un todo y constituirá la base logística y administrativa para dirigir las actividades de los servicios en apoyo de las operaciones militares. El límite entre ambas se conoce como línea de retaguardia. La zona del frente se divide en tantas zonas de acción como grandes unidades (brigadas, divisiones, cuerpos) operan en ella: cada zona bajo el mando del comandante de la correspondiente unidad". El CAPISE identificó en el interior de la selva Lacandona la lógica de los "escalones" compuestos dentro de las unidades circunstanciales (cuya existencia, por cierto, niega la Sedena): el agrupamiento Cruz se despliega desde Ocotalito hasta El Calvario; el agrupamiento Palma se despliega desde Rancho Península hasta Ibarra, y el agrupamiento Car se despliega desde Patihuitz hasta San Quintín. El 91 batallón de infantería (fuerzas de intervención rápida, FIR) se despliega desde Copalar hasta Río Ixcán. El Primer Cuerpo del Ejército (1CE) se despliega desde Ocotalito, pasando por Monte Líbano, Taniperla, El Calvario, Ibarra, Río Corozal y Santo Tomás, teniendo su cuartel general en Temó dentro de la zona intermedia. A esto se agrega la 11 CINE, destacamentada en Altamirano y El Vergelito (unidades de apoyo logístico)". (La Jornada, 12/febrero/2004).

Con acciones como éstas el gobierno lo menos que quiere es respetar los derechos de las comunidades y mucho menos resolver el conflicto en “15 minutos” como lo decía el presidente Fox. Lo que si está dispuesto a hacer es seguir ejerciendo presión y a seguir con el desgaste del “adversario” por el control de la zona que es rica en recursos naturales y que por lo tanto es objeto del deseo de más de una empresa y por más de un gobierno. Y es así cómo la escalada de violencia en el país no para y es aún auspiciada por los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal.